

IX Encuentro Internacional de Economistas sobre la Globalización y Problemas del Desarrollo.

Las tendencias de política económica en América Latina y el Caribe (ALC). Una crítica al neoliberalismo, a su continuidad por otros medios y los intentos por superarlo.

Por: Julio C. Gambina*

I Introducción

El siglo XXI ha comenzado con expectativas de cambio, por lo menos en lo que atañe a Latinoamérica y el Caribe. El acento se coloca en general en los gobiernos de la región, la mayoría de ellos surgidos de procesos sociales de resistencia a las políticas hegemónicas del ciclo anterior, generalmente denominado “neoliberal” y que se asentara en las políticas identificadas con el “Consenso de Washington” (CW) de ajuste estructural y modificación de las formas que asumen las relaciones socioeconómicas. Anticipamos nuestra tesis favorable a poner la vista, más en la dinámica del movimiento popular y los sectores subalternos que en la dimensión gubernamental, siendo ambos parte de una ecuación en la disputa por el orden social con las clases dominantes.

Asistimos por lo tanto a un ciclo político y social que niega la práctica hegemónica de la década del 90' del siglo pasado, por lo menos en lo discursivo. Son minoría las formulaciones que reivindican el programa de liberalización de la economía sustentado en años previos. En general predomina la crítica a las políticas de ajuste estructural y a sus mentores y se reivindica una política alternativa, que privilegia intereses soberanos de cada uno de los países en cuestión. El interrogante que nos hacemos remite a la economía, más precisamente al accionar de las políticas económicas para revertir el impacto regresivo generado sobre la distribución del ingreso y la riqueza, y que significara una expansión de la brecha entre sectores sociales de mayores y menores ingresos.

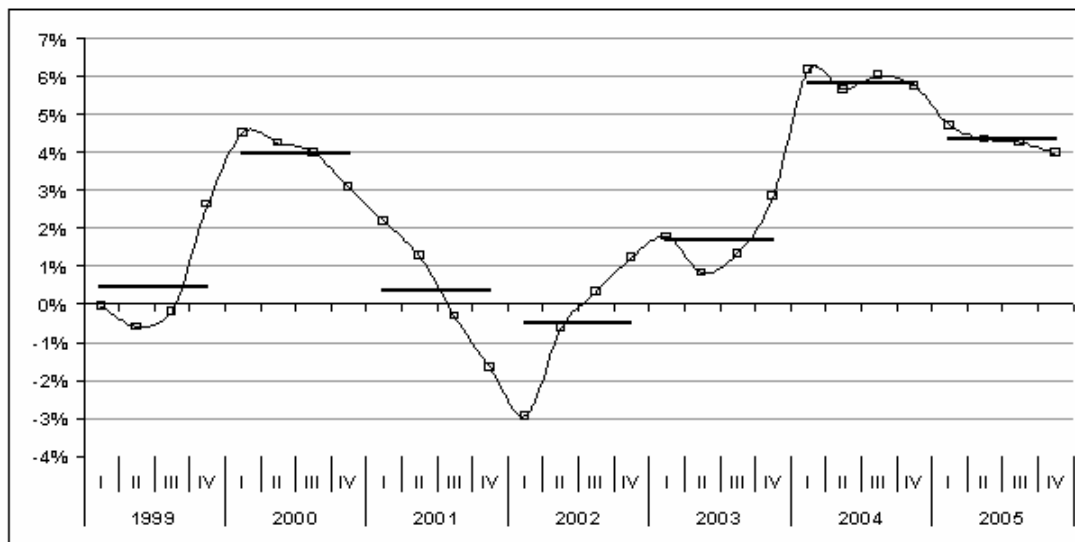
Existe coincidencia sobre un giro a la izquierda en la región Latinoamericana y Caribeña, aunque con matices en los alcances y profundidad de los programas de cambio. Los matices no son menores y es por ello que los sectores ideológicos y teóricos asociados al poder económico, tales como *The Economist*, la prensa históricamente funcional a la derecha en la región, e incluso destacados y mediáticos intelectuales, todos abonan el análisis compartido sobre la existencia de un giro a la izquierda donde emergen proyectos “serios y responsables” y otros “populistas e irresponsables”. Entre estos últimos califican Venezuela y Bolivia, asociados ambos a Cuba, que no es parte del nuevo fenómeno, sino que es consultor privilegiado para gobiernos que se proponen confrontar con los hegemónicos del continente, especialmente EEUU. Entre los serios y a la vanguardia emerge Chile, con sus dos últimos presidentes socialistas: Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En el medio y en disputa, pero con historia política y económica más afín a éstos últimos se ubica a los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay. Colombia es la excepción que confirma la regla en materia de tendencias para un cambio de rumbo en la región. A ello deben sumarse ciertas incertidumbres a propósito de la evolución de fenómenos tan complejos como los que se definen en Ecuador y Perú, con historia reciente de movilización y organización popular para pensar en otro rumbo en esos países.

* Profesor en la Universidad Nacional de Rosario y la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (entidad miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO). Integrante del Comité Directivo de CLACSO (2006-2009). Director Adjunto del Centro Cultural de la Cooperación.

Coyuntura económica

La región viene atravesando un ciclo de crecimiento luego de la fuerte caída a finales del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI (Gráfico I). Es el periodo que involucra la crisis de Brasil en 1999 y en Argentina a fines del 2001. En ambos casos se modificaron los precios relativos con políticas cambiarias flexibles que supusieron una devaluación de la moneda local. Ambas crisis afectaron las variables macroeconómicas en cada uno de los países y cambiaron las tendencias de ampliación de la sinergia mutua en el comercio intra MERCOSUR. Se verifica desde entonces una disminución creciente del intercambio mutuo y que se venía extendiendo desde el comienzo de la integración en 1991 y hasta 1998. Desde ese momento se inicia una disminución del flujo comercial con mutación de las tendencias de saldo favorable desde Argentina a Brasil, consolidando así un crecimiento de la brecha entre Brasil y el resto de los integrantes del MERCOSUR.

Gráfico I
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1999-2005
(Tasa de variación anual)



Fuente: Elaborado por Centro de Proyecciones Económicas (CPE) de la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL, según información oficial de cada país.

Este periodo de crisis económica coincide con el límite al discurso neoliberal como expresión de las políticas económicas a seguir. Los nuevos discursos que se instalan luego de la crisis, son coincidentes con un ciclo de crecimiento económico ininterrumpido desde el piso representado en el primer trimestre del 2002, y que se mantiene en ascenso hasta fines del 2003, para estabilizarse en 2004 y comenzar una tendencia leve a la baja en el ciclo siguiente.

Las proyecciones (Cuadro I) indican unas expectativas para mantener el rumbo de crecimiento, pero con disminución de ritmo en la expansión de corto plazo hacia el 2007. La tesis sustentada es que la evolución de la macroeconomía regional es más producto del ciclo económico mundial, que derivado de políticas de cambio del paradigma de producción y distribución del ingreso y la riqueza en los países de la región.

Cuadro I

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL PIB, 2004-2007

(Tasa de variación porcentual anual)

País	2004	2005	2006	2007
Argentina	9.0	9.2	7.5	5.5
Bolivia	3.6	4.1	3.3	3.0
Brasil	4.9	2.3	3.5	3.7
Chile	6.1	6.3	5.7	5.5
Colombia	4.0	5.1	4.8	4.5
Costa Rica	4.2	4.1	3.7	3.5
Ecuador	7.6	3.9	3.0	2.5
El Salvador	1.5	2.8	3.5	3.4
Guatemala	2.7	3.2	4.0	4.0
Haití	-3.5	1.8	2.3	2.5
Honduras	5.0	4.2	4.0	4.0
México	4.2	3.0	3.5	3.5
Nicaragua	5.1	4.0	4.0	4.0
Panamá	7.6	6.4	6.0	6.5
Paraguay	4.0	2.7	3.0	3.0
Perú	4.8	6.7	5.6	5.0
República Dominicana	2.0	9.3	6.0	5.0
Uruguay	12.3	6.6	4.5	4.0
Venezuela	17.9	9.3	7.0	4.5
Caribe	4.0	4.2	5.9	4.3
Total	5.9	4.5	4.6	4.1

Fuente: Elaborado por el Centro de Proyecciones Económicas (CPE) de la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL, según información oficial de cada país.

El crecimiento de la demanda global, empujado por las locomotoras de la economía mundial, EEUU y China, constituyen la base para pensar en el ciclo global de crecimiento del capitalismo y en ese marco ver el crecimiento de la economía latinoamericana y caribeña. Con lo cual se reproduce el sino histórico de subordinación dependiente al ciclo económico del sistema mundial. En ese sentido se trata de pensar más en las decisiones que se asumen fuera de la región para apreciar su impacto en las economías de nuestros países. No es entonces un crecimiento derivado de estrategias locales y menos, pensar en modificaciones del patrón de acumulación sostenido como forma de superación de la crisis de los años 70' y las políticas de ajuste estructural impulsadas al amparo del Consenso de Washington en los años 90'.

Buena parte del crecimiento regional está motivado en una fuerte expansión de las economías de Argentina (2003/2006) y Venezuela (2004/2006), las que salen de procesos profundos de crisis y por lo tanto, su crecimiento es relación con años de recesión y baja del producto y que inciden en la mejora de la performance de toda la región, especialmente desde el 2004 (Cuadro II). Son datos que tienen el análisis de la coyuntura.

Cuadro II
Evolución del PIB para ALC, especialmente Argentina y Venezuela

	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
Venezuela	0,2	-6,1	3,2	2,8	-8,9	-9,4	17,9	9,3	7	4,5
Argentina	3,9	-3,4	-0,8	-4,4	-10,9	8,7	9	9,2	7,5	5,5
ALC	2,3	0,5	3,7	0,4	-0,6	1,5	5,9	4,5	4,6	4,1

Fuente: CEPAL. Datos del estudio económico de América Latina y el Caribe. 2003/04 para los años 98/03 y del Centro de Proyecciones Económicas (CPE) para 06/7 (Ver la serie completa en Anexo).

II Nuevos rumbos de la integración regional

El cambio en el debate sobre el rumbo de la economía y la política en la región latinoamericana y caribeña se explica en primer lugar, por la dinámica social de la resistencia desarrollada en un ciclo de lucha de clases que ubicamos entre el caracazo en 1989 y la revueltas populares que arrastraron a gobiernos sudamericanos en los primeros años del Siglo XXI, como en Argentina del 2001, y luego en Ecuador y Bolivia.

Son años de profundos cambios en la correlación de fuerzas sociales, políticas e ideológicas, contruidos desde el mismo momento en que se hizo explícita la hegemonía de la iniciativa política del capitalismo en la escena global, entre la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la URSS. Partimos de reconocer la existencia, a veces invisible, de dos proyectos antagónicos de estructuración del orden mundial. Es lo que explica el retiro del “discurso único” e incluso una tendencia a la generalización de la crítica al discurso hegemónico en los años 90’.

Pero siendo la dinámica social la condición necesaria de los cambios, no supone razón suficiente para la implementación de los mismos, pues el dato relevante deviene de la posibilidad política para que esa manifestación de poder popular incida en la gestión de gobierno para disputar el orden social, tanto local como global. Nuestra afirmación se vincula al hecho de que no todas las revueltas populares han significado mutaciones en la cuestión del poder y mucho menos en abrir paso a una política de modificación de las relaciones sociales de producción que apunten a eliminar el sustento social derivado de la explotación.

El nuevo dato de la realidad regional resulta de la emergencia de nuevos sujetos políticos que empiezan a discutir y reorientar el rumbo del orden social vigente. Mucho se habló de expectativas de cambio a propósito de los nuevos gobiernos que emergieron en Brasil y Argentina en 2003; Uruguay en 2005, Bolivia en 2006, e incluso en Chile gobernada por socialistas desde el 2002 y especialmente con el recambio de Ricardo Lagos por Michelle Bachelet en 2006. Son experiencias que sumadas al gobierno venezolano y al de Cuba daban cuenta de especulaciones en torno de un nuevo eje de articulación regional, que variaba según los interlocutores, pero que sintetizaba una sintonía previsiblemente común entre Buenos Aires, Brasilia, Caracas y La Habana, a quienes se adicionaba a Montevideo, La Paz y Santiago de Chile. Esa es la base para la emergencia de un “nuevo discurso” en nuestros países. Ya no se hace profesión de fe sobre el Consenso de Washington o sobre las políticas de ajuste estructural. Estas formulaciones son impopulares. En efecto, lo nuevo y ya en materia de integración regional se asocia a la suscripción de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA y al Tratado Comercial de los Pueblos (TCP)¹.

¹ Acuerdo suscripto el 29-04-06.

Son iniciativas que habilitan una seria discusión sobre el rumbo de otras preexistentes, tales como la Comunidad Andina de Naciones, CAN, de la que salió Venezuela y el MERCOSUR, al que recientemente se incorporó el régimen de Caracas.

Es una situación que genera dificultades y desafíos para cada emprendimiento. En el caso de Brasil y Argentina se les añade una potencia petrolera con fuerte capacidad financiera y que intentarán incorporar a su estrategia de inserción internacional, que según los discursos de sus jefes de gobierno, no apuntan en el sentido formulado por Hugo Chávez de Construir un “Socialismo del Siglo XXI”.

Tanto Brasil como Argentina se disputan la complacencia de Washington en el liderazgo regional, pero se ven obligados a desarrollar emprendimientos conjuntos y negociaciones claves con Venezuela y Bolivia. Ambos necesitan de los hidrocarburos y la renta líquida que ellos generan en un momento sin límite aparente del precio del petróleo. Por ello las contradicciones a la hora de pronunciarse ante el hecho del anuncio de las “nacionalizaciones” bolivianas. Al principio afloraron las recriminaciones y desagrados por una política de signo contrario a las hegemónicas en la región, orientadas al mercado como legado de las reformas estructurales neoconservadoras de los 90'. La derecha brasileña le imputó a Lula “no defender suficientemente la soberanía” y en la Argentina, el titular de Repsol declaró a la prensa que se trataba de una “medida injusta” que afectaba sus intereses. Son sectores de peso económico y político que influyen las decisiones de los gobiernos y obstaculizan la creación de un bloque popular que incida, autónomamente, local y regionalmente. El movimiento popular de los dos países presionó desde la solidaridad con la medida soberana asumida por Bolivia contribuyendo a inclinar la balanza hacia la aceptación, aunque es cierto que en las cuentas de las empresas petroleras que actúan en Bolivia, pese a los cambios, mantienen importantes niveles de rentabilidad asociados al elevado precio del petróleo y el relativo bajo costo de producción. Son aseveraciones que ponen en discusión el rumbo de la región, tanto por las medidas que impulsan los gobiernos que explícitamente avanzan más allá del discurso y lo que ello puede generar como cultura de transformación regional.

Patrón de acumulación en discusión

La nacionalización de los hidrocarburos anunciada el primero de mayo del 2006 por Evo Morales actúa en la redefinición de las articulaciones regionales en materia de política exterior de los Estados, y colocó en el debate el rumbo a definir por cada uno de los países y la región. En el MERCOSUR, luego de 15 años de integración y con un balance crítico en materia de logros, especialmente para los pueblos, la incorporación del nuevo miembro reabre las expectativas, tanto por lo que supone el proceso transformador al interior de Venezuela, como por lo que puede significar en la definición del rumbo económico y social en la región. Venimos sosteniendo que el nuevo Siglo trajo algunos cambios importantes en la región latinoamericana y caribeña que motivan al debate sobre las transformaciones correspondientes en materia de política y economía.

Con muy pocos días de diferencia, Roberto Lavagna y Fernando Henrique Cardoso, ambos ex ministros de Economía de Argentina y Brasil respectivamente; pretendiente a presidir el país el primero y Presidente en dos ocasiones el segundo, realizaron manifestaciones similares sobre los riesgos que supone la asociación del cono sur de América con la revolución bolivariana.

Dos son los temas básicamente puestos en cuestión. Uno de ellos remite a las restricciones al proceso democrático en desarrollo en la zona, desconociendo los aportes de la constitución venezolana a formas directas y semidirectas de participación popular en la toma de decisiones, y más aún el hecho concretado de plebiscitar a mitad de mandato la continuidad presidencial en la administración gubernamental. Un hecho irrepetible en cualquiera de los regímenes políticos vigentes en el ámbito

mundial. El otro aspecto cuestionado consigna el tipo de relaciones sociales de producción que promovería Venezuela, contrarias a la “economía de mercado”.

Lavagna sostuvo sobre el **“Mercosur**: La posibilidad de que Uruguay pase de ser miembro pleno a miembro asociado, combinada con el acceso pleno de Venezuela, le hace perder al Mercosur imagen en dos cuestiones que son claves: su contenido democrático y si va a seguir estando organizado bajo una forma de economía de mercado o no lo va a estar. **No es eso lo que Venezuela incorporaría** y mucho menos si eso se combina con el retiro de Uruguay.”²

Cardoso sostiene que “En los 90 habíamos concebido la integración económica y política de América del Sur con base en la democracia política y la economía de mercado. Los cimientos de todo este edificio podrían socavarse si regresara a la región el populismo, disfrazado de izquierdismo, trayendo consigo el juego de las rivalidades antiguas y muchas veces personales, en lugar de la cooperación institucional entre las naciones.”³

Ambos utilizan el eufemismo “economía de mercado” para sostener la defensa del capitalismo, contra el socialismo que pregonaba Chávez. Es sin duda un debate sobre el rumbo de la integración y el orden social necesario. No hay dudas que en América Latina y el Caribe se ha producido un giro a la izquierda sustentado en la dinámica movilizadora de los pueblos. Los gobiernos se ven sometidos a la presión popular por revertir las políticas hegemónicas instrumentadas en los últimos tiempos, las que tuvieron efectos regresivos en materia de distribución del ingreso y la riqueza. Pero también se encuentran sometidos a la influencia de las clases dominantes para mantener y profundizar la “modernización capitalista” surgida del Consenso de Washington y el ajuste estructural favorable a la liberalización de la economía. Si se mira el MERCOSUR desde Argentina o Brasil, se puede afirmar que los grandes beneficiarios han sido las empresas monopolistas en los rubros de alimentos, energía y de la industria automotriz, mayoritariamente en manos del capital externo. Si se mira desde Paraguay y Uruguay se confirma la estructura dependiente de la transnacionalización derivada de la liberalización.

En el análisis de los sectores hegemónicos que expresan Lavagna y Cardoso, capitalismo y democracia son un par virtuoso que se opone al autoritarismo, según ellos innato de las propuestas izquierdistas, o “populistas” en el escrito del brasileño. Es una calificación antojadiza que no pone en discusión el crecimiento de la desigualdad generado en la región y producto de las políticas ejecutadas e inspiradas en el neoliberalismo en las últimas décadas. En rigor, es importante la deuda que dejan las “democracias realmente existentes” en nuestros países, donde la corrupción es moneda corriente. Más negativo aún resalta el carácter regresivo de la economía, donde la concentración de la riqueza convive con el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad.

Sin perjuicio de las opiniones comentadas, un interrogante remite a la voluntad política de los pueblos sobre qué integración regional puede construirse. Venezuela integra junto a Cuba y Bolivia la propuesta ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas que supone una articulación con beneficio mutuo entre los partícipes. Cada quien ofrece experiencia y recursos específicos, p.e. Venezuela con su riqueza petrolera, Cuba su mayor desarrollo en fuerza de trabajo calificada en salud, y educación, o Bolivia su experiencia en estudios culturales asociados a los pueblos originarios, entre otros ejemplos. ¿Aportará Caracas esa experiencia y potencialidad al MERCOSUR? ¿Aceptarán los integrantes del MERCOSUR ese aporte? ¿Puede pensarse en una asociación creciente entre el ALBA y el MERCOSUR? ¿Aún, en otro sentido, el MERCOSUR trasladará a Venezuela el espíritu de libre

² Clarín, 6/5/06. Las negritas son del texto original.

³ Clarín, 18/06/06.

comercio con que fue creado en 1991, en pleno auge de las políticas liberalizadoras? ¿Qué influencia pesará más?

Es probable que pueda existir un dialogo de sordos, o que cada quien intente hacer negocios mas allá de la ideología o la política, pero no hay dudas que se desarrollará una tensión entre quienes fundan su accionar en la promoción del capitalismo o de un socialismo como practica popular creativa a generar en este nuevo siglo. Tal como planteamos al comienzo, el problema no se procesa tanto en las definiciones que asuman los gobiernos, sino en la capacidad de construir alternativa política para otro orden social y con base en la dinámica resistente de los pueblos. Ese es el dato a considerar y constituye la base para pensar en los rumbos de la integración y el proyecto de civilización necesario en este tiempo histórico.

Lo cierto es que el ALCA era un proyecto de las clases dominantes y que aparecía hasta hace muy poco como inexorable. Mientras que el ALBA era denostado en tanto propuesta utópica. La resistencia popular y los límites y contradicciones generadas dentro del proyecto hegemónico obstaculizaron el ALCA como acuerdo general para la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. El reverso de la imagen proviene del avance concreto para materializar la otra integración posible definida en el ALBA y con perspectivas de articular algo más que un acuerdo entre tres Estados nacionales (Venezuela, Cuba y Bolivia) y promover la integración de Estados sub nacionales e incluso asociar emprendimientos del movimiento popular. El debate se integra ahora al seno del MERCOSUR. Somos partidarios de la tesis que argumenta que la integración regional es convergente con un desarrollo local, en tanto y en cuanto, ambos procesos alientan patrones alternativos para otra acumulación económica y con otros beneficiarios para revertir la regresividad construida en los últimos años, especialmente en la década del 90´.

Debatir el socialismo

La otra objeción de los críticos del régimen venezolano y extensivo al boliviano se vincula con la “democracia”. Tanto Venezuela como Bolivia expresan niveles importantes de movilización y protagonismo popular en la política local y están muy lejos de ser considerados regímenes antidemocráticos. Ya nos hemos referido a la democracia en Venezuela. Bolivia por su parte expresa uno de los mayores indicadores de adhesión popular, tanto en la cantidad de votos que ungió presidente a Morales, como actualmente en la aceptación de su gestión. Bolivia encara ahora su reforma constitucional, alentando un mayor protagonismo de los trabajadores y organizaciones populares en la toma de decisiones institucionales y en la defensa de nuevos mecanismos que afirman la soberanía popular. Por su parte, el peso de la economía estatal es definitorio en la definición del uso de parte de la renta, especialmente derivada de la explotación de hidrocarburos, en Venezuela y ahora en Bolivia. En las dos experiencias se alientan formas asociativas de organización de la producción, vinculadas a colectivos de trabajadores, productores agrarios y pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad. Son tendencias orientadas a operar cambios en las relaciones sociales de producción y distribución del producto socialmente generado.

Digamos también, que el socialismo no puede definirse “sólo” por el peso del Estado en la economía, pero es un hecho que la amenaza de avanzar hacia un orden socialista está presente, por lo menos como hipótesis de construcción a futuro, en las gestiones de Caracas y La Paz, ahora asociadas a La Habana. No es un tema que necesariamente sea así formulado por los gobiernos, pero es un hecho que existe el temor en ese sentido, y así lo explicitan las sospechas del imperialismo y las clases dominantes. No en

vano, George W. Bush acaba de pontificar sobre la amenaza a las democracias de los procesos políticos en Bolivia y Venezuela.⁴

El socialismo es a su vez una tradición histórica en la región. Hay quiénes imputan un socialismo empírico a Simón Bolívar, a medio camino entre los utópicos y los científicos y que se expresa en sus proyectos de reparto de tierras y brega por la igualdad, la libertad y contra la esclavitud. Es parte también de la tradición de los revolucionarios de la primera independencia en nuestra América, que como Castelli en el norte de Argentina impulsaron la entrega de las tierras a los habitantes más necesitados y vinculados al trabajo agrícola. Del mismo modo opera el planteo de Mariátegui, más recientemente, en los años 20 del Siglo XX al sostener que el “mito en la región era la revolución socialista como creación heroica de los pueblos”. Es el camino de Ernesto Guevara, el proyecto revolucionario en Cuba y el aliento a una camada de revolucionarios que en los años 60´ y 70´ sustentaron desde distintas visiones la perspectiva continental de la revolución socialista.

Se trata de un rumbo interrumpido por la ofensiva capitalista en los años 70´, el terrorismo de Estado emergente y las políticas hegemónicas que sustentaron el neoliberalismo imperante producto del programa que en los años 90´ propugnó el Consenso de Washington.

Más que pensar en objetivos finalistas, de qué sociedad construir, el eje del debate está en el rumbo a seguir. Lo que está en discusión en la región es el rumbo de una estrategia, que más allá de las definiciones podemos definir capitalista o socialista. Es un rumbo a seguir con independencia de que se presente como un debate explícito. De todos modos, Cuba sostiene el proyecto socialista y Venezuela se anima a definir sin contenido específico aún la perspectiva de un Socialismo del Siglo XXI. Desde Bolivia no hay calificaciones, aunque el Vicepresidente antes de asumir habló en la prensa argentina de un difuso “capitalismo andino” que supere la informalidad de la organización económica de ese país. El camino de la nacionalización de hidrocarburos y la reforma agraria en este país, puede contribuir a definir cambios en las relaciones sociales con proyección socialista.

En Argentina es donde claramente se habla de “reconstruir el capitalismo nacional”, que más allá de la discusión sobre el adjetivo “nacional” y su posibilidad o contenido bajo la dominación de las transnacionales, queda claro el propósito del rumbo capitalista. Los “socialismos” gobernantes en Chile y Uruguay parecen satisfechos con la continuidad de un modelo de política económica de clara orientación capitalista. Brasil confirmó hasta ahora, e incluso profundizó, con Lula, la modernización y adecuación capitalista, neoliberal.

Seamos concientes que no estamos como en los años 60´ y 70´ donde la discusión era por la liberación contra la dependencia, de fuerte contenido antiimperialista y anticapitalista, donde el socialismo era una consigna que movilizaba a millones. En todo caso, la discusión se radicaba en las formas de acceso al gobierno en la lucha por el socialismo, pero no sobre el destino de la nueva sociedad. La nueva realidad política a comienzos del Siglo XXI reinstala la posibilidad de legitimar nuevamente la disputa civilizatoria entre capitalismo y socialismo. ¡Qué lejos de aquellas premoniciones de fin de la historia y del socialismo!

La lucha por la participación democrática de la sociedad y un rumbo de transformaciones de las relaciones sociales de producción nos hacen pensar en una perspectiva anticapitalista y por el socialismo en América Latina y el Caribe. Son objetivos que para materializarse deben, en primera instancia, formularse.

⁴ Clarín, 23/05/06.

Entre la crítica a la integración subordinada y la posibilidad de la “integración alternativa”

El realineamiento regional se pone de manifiesto en el traspie de la estrategia multilateral sustentada por Washington en el ALCA, y convocó a nuevos caminos para hacer efectiva la liberalización de la economía, y no solo en la estrategia de EEUU. Luego de la Cumbre de Mar del Plata (noviembre de 2005), la diplomacia estadounidense confirma el camino de los acuerdos bilaterales o por regiones, incorporando en el último tiempo a Colombia, Ecuador y Perú, en un trayecto ya transitado por México y Canadá y luego por Chile. Es un proceso simultáneo al que empujan otros bloques como la Unión Europea, ó países, que como China, negocia acuerdos bilaterales en la región. Chile aparece entre los primeros negociadores y a la vanguardia de la suscripción de TLCs, con EEUU y la Unión Europea y ahora avanza con China en el mismo sentido.

La Cumbre de Viena en mayo 2006, entre la Unión Europea (UE) y América latina y el Caribe (ALC), ante el fracaso de un acuerdo de comercio e inversiones, define a los europeos a profundizar el camino del bilateralismo ante los límites del multilateralismo. De todos modos, en diciembre del 2005 y el seno de las negociaciones de la OMC, tanto Argentina como Brasil fueron interlocutores necesarios del poder económico global por la liberalización y que se materializó en los acuerdos hacia el 2013.

La disputa global de las transnacionales y los gobiernos de los países de origen es por la dominación de la región ALC. Es que los recursos naturales, la biodiversidad y la fuerza de trabajo barata son atractivos en la búsqueda de apropiación de plusvalor y dominación en el sistema mundial.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) está en camino de desestructuración con el retiro de Venezuela. El Mercosur aparece debilitado, entre otros episodios por la crisis entre Uruguay y Argentina, los reclamos de los más chicos, Uruguay y Paraguay, sobre los dos más grandes, e incluso por las dificultades entre Brasil y Argentina. Un interrogante es la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), oportunamente sostenida e impulsada por Brasil y acompañada por la gestión de Eduardo Duhalde al frente de la coordinación del Mercosur. El lugar de coordinador del MERCOSUR es ahora ocupado por Carlos Chacho Alvarez, totalmente funcional a los objetivos y políticas de Néstor Kirchner, y uno de los impulsores del “Consenso de Buenos Aires”, programa de adecuación del paradigma de política económica de los 90’ hacia una moderación del tipo “tercera vía”, oportunamente sustentado por el laborismo británico con Tony Blair e inspirado ideológicamente por Anthony Giddens.

Venezuela y su iniciativa en política exterior para la región es clave en el proyecto de la CSN, desde su inclusión en el MERCOSUR, y se vincula a la cuestión energética, incluso más allá del Sur de América. Los acuerdos impulsados desde Caracas con la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, involucra a países del Caribe (Petrocaribe), de la zona Andina (Petroandina) y en el Cono Sur (Petrosur). En el Sur se trabaja en una doble articulación con Bolivia, Uruguay y Paraguay por un lado y con Brasil y Argentina por el otro en la instrumentación del gasoducto del Sur. Aparece así el gobierno venezolano en una actitud muy clara de articulación energética en el Sur y en toda la región latinoamericana y caribeña.

A todo ello deben sumarse las iniciativas de venta de combustible subsidiado a espacios del movimiento popular en EEUU y ofrecido para desarrollar próximamente en Europa. Es una estrategia que se potencia con el nuevo gobierno de Bolivia y la política de nacionalizaciones en el área energética. Uno de los interrogantes de difícil respuesta apunta al sostenimiento de elevados precios del petróleo que favorezcan la utilización de una renta petrolera abultada para empujar cambios en las relaciones sociales.

Estos realineamientos comentados ponen en evidencia la crisis de un ciclo de integración surgido del orden neoliberal. Los procesos integradores de los años 60' a los 80' han fracasado y solo quedan los restos de una institucionalidad sostenida por sus respectivas burocracias internacionales. La nueva institucionalidad de la integración sobrevive en una metamorfosis permanente surgida de los cambios alentados por la dinámica popular y los nuevos procesos de transformación social.

Es evidente el desarme de lo existente. Ni EEUU ni Europa pueden asegurar sus proyectos integradores globales y ahora proponen su propia negociación de un tratado bilateral que resguarde los intereses de sus transnacionales de origen. Pero tampoco son sustentables los proyectos pensados por burguesías locales y asociadas a transnacionales para alentar emprendimientos regionales de integración. Ni el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones pueden presentarse en etapa de consolidación o expansión, es más, ambos muestran retrocesos. La CAN se achica y el MERCOSUR deteriora su objetivo de “mercado común” a “unión aduanera imperfecta” y de allí a mera “zona de libre comercio”.

El articulador de una perspectiva distinta es el proyecto venezolano, que sustenta el ALBA, ingresa como socio pleno del MERCOSUR y es parte de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Es un interrogante la perspectiva que asume esta multiplicidad de pertenencias, todas son parte del realineamiento en proceso. Atrás de cada uno de estos procesos operan intereses económicos que no son ajenos al debate anterior relativo al rumbo en nuestra región. Es prematuro señalar quién influencia a quién en esta disputa por asegurar orientaciones de construcción social, pero lo importante es que al comienzo del Siglo XXI existen movimientos en el proceso de integración y ya no son los que define el programa de máxima del capital concentrado y el accionar de los Estados más poderosos del planeta.

Energía, alimentos e industria para la integración alternativa. Papel de los estados y las CTN

Con la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, tanto Brasil como Argentina acusaron el golpe de la relación económica hasta ahora constituida con Bolivia. Si bien terminarán asumiendo el incremento del precio del Gas que Bolivia les exporta y que resulta estratégico actualmente para Brasil (25% del gas consumido es importado desde Bolivia), y también para Argentina (aunque solo el 5% proviene de Bolivia), especialmente en la perspectiva de continuidad del crecimiento económico, anunciado en un cuarto año (2006) de expansión de su PBI cercano al 9% anual. En los dos países hace ruido la decisión soberana del gobierno de Evo Morales.

Por su parte, Venezuela cedió parte del nuevo porcentaje establecido como ganancia permitida en la explotación local del crudo para mejorar las cuentas de Bolivia. Son dos formas diferentes de asumir una relación económica bi regional y que define el contenido de las relaciones internacionales en la perspectiva de determinado rumbo para el desarrollo económico y social.

Es un tema crucial la provisión de energía, máxime con la situación petrolera mundial, de expansión sin límite, por ahora, del precio del crudo. Hoy se mantiene en torno a 75 dólares el barril y con perspectiva de aumento. El debate es quién se apropia de esa renta en la región. Venezuela presenta importantes reservas de petróleo y gas. Bolivia tiene estratégicas reservas gasíferas. Brasil acaba de manifestar su carácter autosuficiente en petróleo. Argentina está a punto de pasar a ser importador, a lo que debe adicionarse la concesión privada de pozos petroleros y la privatización de su empresa de petróleo en los años 90'.

Todos estos países son parte del proyecto de construcción de gasoductos que pueden articular a la región para aprovechar zonalmente una ventaja energética natural y explotada para beneficio de los vecinos, modificando una tendencia de aprovechamiento de capitales transnacionales y de las grandes

potencias. Pero esos emprendimientos requieren de tecnología que proviene de empresas transnacionalizadas que tienen origen regional pero con proyección global, especialmente Techint, originaria de Argentina y con negocios en varias partes del mundo en su especialización monopolista en caños sin costura. Lo cual nos lleva a considerar en el debate sobre el rumbo del orden social regional a las Corporaciones Transnacionales (CTN), algunas de las cuales tienen importante presencia en la región. Entre otras podemos mencionar a Repsol, e incluso a Petrobras que incorpora presencia de capital privado entre sus propietarios.

Algo similar ocurre si pensamos en la especialización en alimentos o industrial en general, que presentan tanto Argentina como Brasil y que pueden extender al conjunto de la región para organizar un programa integral de desarrollo autónomo, en un momento de liquidez y capacidad de generar superávit fiscal. Lo que importa son las conductas a asumir por los distintos actores involucrados a los que estamos aludiendo. Son tres actores sociales que definen en lucha, el rumbo de la economía y la política en la región. **Uno** son los pueblos movilizados y con peso en la gestión de los gobiernos. **Otro** son los Estados, y no solo los estados nacionales de la región, sino también aquellos que tienen intereses o que los pretenden en la zona y **especialmente** los capitales transnacionales, de cualquier origen y que son la base sustancial de la iniciativa política por la liberalización a escala mundial.

Estado y mercado

Un debate que hemos suscitado en los últimos años se vincula a la relación entre el Estado y el Mercado. Para muchos eran presentados como categorías antagónicas y sin embargo, las reformas pro mercado fueron impulsadas desde los propios estados. Lo que cambió fue la función del Estado, desde un papel de intervención directa en la producción y distribución de bienes y servicios a la materialización de las privatizaciones de empresas públicas. La definición por la iniciativa privada era una demanda de la acumulación de capitales que ya no requería del Estado como sostén y actor directo a favor del ciclo del capital. Las CTN sostienen hoy sus posiciones y demandas en la escena global empujando a sus Estados a defender en diferentes negociaciones multi o bilaterales sus propios intereses.

También crece la resistencia a las CTN. En el caso argentino crece una campaña para desprivatizar el petróleo, contra Repsol-YPF y que involucra a la izquierda y activos militantes asociados a emprendimientos de recuperación de la soberanía. Asocian sus demandas en la búsqueda de mayor protagonismo de la estatal Enarsa, empresa generada por el gobierno recientemente y que solo puede actuar en la explotación extracontinental del petróleo, ya que los pozos continentales están totalmente concesionados. Pero también podemos rescatar el caso ecuatoriano, donde el Estado puso fin al contrato con la Oxy que violó el convenio que le impedía traspasar sus acciones a otra empresa sin autorización del Ministerio de Energía. La Oxy anunció un juicio en los Estados Unidos por 1.000 millones de dólares de indemnización, poniendo de manifiesto su intención de continuar la batalla en territorio más favorable. Algo similar a lo que hicieron las empresas privatizadas en Argentina, que demandaron al Estado ante el CIADI por 16.000 millones de dólares ante el cambio de “las reglas del juego establecidos al momento de la privatización”. Son todas acciones en defensa de la seguridad jurídica de las inversiones externas. La campaña contra las CTN avanza y recientemente en la cumbre popular “enlazando alternativas 2” realizada en Viena, en paralelo a la Cumbre entre la Unión Europea y ALC, se llevó adelante la constitución del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), donde un conjunto de expertos y testigos acusó ante el TPP a unas 25 CTN por afectar la calidad de vida, ambiental y de trabajo de las poblaciones en que asientan sus inversiones.

Resulta destacado que la tendencia global que recorría ALC a favor de la liberalización y el papel dominante de las CTN haya tenido límites a partir de los procesos venezolanos y bolivianos y más aún,

que el epicentro de la controversia sean los recursos energéticos, tema central en la preocupación imperialista de dominación global ejercida hoy por EEUU.

Existe un importante debate en torno a la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, que ahora involucra a una población de 250 millones de personas y expresa un 75% del PBI de Sudamérica. El fenómeno ocurre en un momento de crisis del proceso de integración regional, que podemos sintetizar en las demandas insatisfechas de los asociados chicos (Paraguay y Uruguay) sobre los dos grandes (Argentina y Brasil); los conflictos económicos que separan a la Argentina de Brasil en variadas producciones; o el diferendo entre Argentina y Uruguay por la radicación de dos empresas productoras de pasta de celulosa en la costa del río que comparten.

El conflicto en el Río Uruguay

Veamos en concreto el conflicto entre Argentina y Uruguay, como elemento que resume buena parte de lo que venimos sosteniendo. El problema tiene su origen en el debate generado en torno a la construcción de dos plantas de pasta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, en la costa uruguaya del Río homónimo. La movilización popular en las ciudades de Gualeguaychu y Colón, en el lado argentino, hizo evidente un conflicto soslayado por gobiernos que oportunamente solo tuvieron en cuenta la faceta económica del emprendimiento. Si bien para Uruguay es un tema heredado, el gobierno de Tabaré Vázquez no tuvo la voluntad política de denunciar los acuerdos preestablecidos y que el Frente Amplio había rechazado en instancias legislativas anteriores. El gobierno de Néstor Kirchner presenta el tema sólo como un problema de afectación del medio ambiente, asumiendo así un ecologismo hipócrita que no considera la contaminación de emprendimientos similares en territorio argentino, incluso con tecnología de producción más contaminante.

Los pronunciamientos populares en defensa del medio ambiente, en ambos países, fueron continuos, incluso antes del inicio de la construcción de las plantas de producción de “pasta”. El mérito de la movilización popular ha sido y es poner en evidencia un conflicto que evidencia los límites de los gobiernos de Argentina y Uruguay para encarar transformaciones económicas y sociales profundas contra el poder económico de las transnacionales. El modelo global de producción capitalista supone el traslado de las industrias contaminantes desde los países capitalistas desarrollados, al tiempo que potencian la explotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo de los países dependientes. La lucha de clases en el escenario mundial se define por un lado con la ofensiva de los capitales más concentrados por subordinar a la naturaleza y a la fuerza laboral a la lógica del mercado y la ganancia capitalista y por el otro, se manifiesta en el rechazo del movimiento popular, aunque aún no pueda expresarse como fuerza material en condiciones de instalar una propuesta política y económica alternativa, más aún al aparecer desarticulada y sin acuerdo de acción común en ambos márgenes del Río Uruguay.

Los hechos tienen antecedentes históricos y se vinculan a estrategias de acumulación de capitales asumidas en ambas orillas del Río Uruguay. Hace dos décadas que inversores locales e internacionales definieron en Uruguay la plantación de bosques de eucaliptos para la producción de pasta de celulosa, materia prima necesaria para abastecer la creciente necesidad de papel en los países del norte, que según la FAO son destinatarios del 65% del consumo de papel del mundo, siendo a su vez los responsables de más del 80% de la producción, destacándose entre ellos Canadá, Suecia y Finlandia. En un estudio publicado por La Insignia se puede leer que “En 1998 se consumieron 294 millones de toneladas de papel y cartón, lo que representa un consumo anual por habitante de 50 kilogramos en el mundo, aunque el consumo en muchos países africanos no llegó ni a 1 kilogramo por habitante, cifra muy alejada de los 330 kilos del norteamericano medio o los 135 kilos de España. Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, que representan menos del 15% de la población mundial, consumen el 66%

del papel y cartón”⁵. La forestación uruguaya de los últimos 25 años se vincula al proyecto generador de una fuente de provisión de materia prima para la industria del papel y de las llamadas “industrias culturales”. Pero del lado argentino también se desarrollan planes de acumulación de capitales y en la costa entrerriana, se vienen desarrollando proyectos turísticos sostenidos por capitales locales e internacionales. En ambas orillas fueron vistos con buenos ojos las inversiones con independencia del origen del capital. Tan así es que se generó en ambos países un clima favorable a la promoción de inversiones. El problema del desempleo en Uruguay y Argentina constituía la razón suficiente para justificar cualquier inversión, aún a costa de la calidad ambiental.

Liberalización económica y promoción de las inversiones

Ambos países han sustituido sus regímenes legales para el tratamiento de las inversiones externas en el clima ideológico y político de los años 90’, suscribiendo acuerdos bilaterales con otros países y entre sí para la promoción y defensa de las inversiones. El MERCOSUR firmado en 1991 es el resultado de ese clima de época y está signado por la orientación al mercado de la economía, la liberalización en el movimiento internacional de capitales y la satisfacción de las necesidades de máxima de los capitales mas concentrados, los que hoy pugnan por la trasnacionalización del mercado global. Tanto en Uruguay como Argentina existían normas de regulación de las inversiones externas establecidas en la década del 70’ que ha sido suplantada por las normas emanadas de la ofensiva capitalista de los últimos años. En los 90 se establecieron nuevos acuerdos bilaterales, los que se han difundido como práctica usual entre los Estados Nación para defender los intereses de las empresas inversoras. Es más, una de las funciones del estado capitalista contemporáneo pasa por su lugar en la disputa global por la radicación de inversiones. Argentina y Uruguay no son ajenos a la disputa por la radicación de las pasteras, sugiriéndose incluso la opción uruguaya de las empresas, ante la excesiva y corrupta demanda operada por las autoridades de la provincia de Entre Ríos en Argentina para ganar la inversión en su territorio.

A los efectos del caso que analizamos pueden consignarse los tratados suscriptos de “Promoción y protección recíproca de las inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España” en abril de 1992 y el “Acuerdo relativo a la promoción y protección de inversiones” firmado en marzo de 2002 entre Uruguay y Finlandia⁶. Dos acuerdos a medida de Ence y Botnia, las empresas española y finlandesa que levantan las pasteras junto al río Uruguay y que son motivo del conflicto. La esencia de ambos tratados define claramente los intereses de las empresas y aún escritos con diez años de diferencia resumen las mismas cláusulas y condiciones favorables a las inversiones externas, pudiendo leerse que *“Cada Parte Contratante acordará siempre, para las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante, un tratamiento justo y equitativo y una total y constante protección y seguridad.”*⁷ Sigue señalando que *“Cada Parte Contratante, en su territorio, no impedirá, con medidas injustas, o arbitrarias o discriminatorias, la administración, el mantenimiento, uso, goce, adquisición o disposición de las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.”* Aunque se habla de las “Partes”, es clara la defensa del inversor externo y podría leerse como que “Uruguay se compromete con Botnia a...”, pues no queda claro cuales son los compromisos de Finlandia, o incluso España, puesto que no quedan claro cuáles son las inversiones uruguayas en esos países, y si las hubiera, se trataría incluso de un beneficio para un capital de origen oriental con pretensión de apropiación de plusvalía en el país europeo. No es imposible, pero no creemos sea el caso.

⁵ José Santamarta. La situación actual de los bosques en el mundo. <http://www.lainsignia.org>

⁶ Ambos acuerdos pueden consultarse en <http://www.parlamento.gub.uy>

⁷ Acuerdo con Finlandia, Art. 2, acápite 2. Se utiliza este acuerdo como referencia por ser el más reciente, suscripto en abril del 2002.

Sigamos con el acuerdo en cuestión, donde pueden leerse la facilidad “*para contratar personal técnico y gerencial superior a su elección, independientemente de su nacionalidad.*”⁸ Se pone así en duda el argumento sobre la contribución al desempleo de las inversiones externas, puesto que el personal “nacional” solo se privilegia en la etapa de construcción de la planta, puesto que la especialización tecnológica posterior demandaría personal técnico y superior foráneo, dejando lugar para los nativos en las tareas más simples y no especializadas. El acuerdo establece igual trato del Estado a los inversores locales y externos.⁹ Se establece que “*Las inversiones realizadas... no serán expropiadas, nacionalizadas ni sujetas a otras medidas, directas o indirectas que tengan efecto equivalente a la expropiación o nacionalización...*” con las salvedades del “*interés público... el debido proceso legal y contra una inmediata, suficiente y efectiva compensación.*”¹⁰ “*Dicha compensación equivaldrá al justo valor de mercado de la inversión...*”¹¹ No resulta ocioso pensar en esta norma, cuando en Bolivia, el gobierno de Evo Morales dispuso por decreto la nacionalización de los hidrocarburos y entre otras quejas, el titular de la española Repsol manifestó el carácter “injusto” de la medida.

Resulta interesante verificar que “*Para los inversores... cuyas inversiones sufran pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio...*” donde se realiza la inversión, la Parte “*acordará con relación a la restitución, indemnización, compensación u otros acuerdos, un tratamiento...*” igual al de los inversores locales, siendo “*Los pagos resultantes... en efectivo, en moneda de libre conversión e inmediatamente transferibles.*”¹² Se establece “*La libre transferencia, hacia y fuera de sus territorios, de los pagos en relación con una inversión...*”¹³ en referencia a movimiento de recursos para ampliar la inversión, remisión de rendimientos y utilidades, o producto de ventas de patrimonio bajo cualquier forma, reembolsos de préstamos, pagos de royalties, licencias, gastos y honorarios de administración, compensaciones y otros gastos derivados de la inversión. Son en conjunto formas de justificación de remesas de utilidades al exterior, explícitas y ocultas.

Insistimos en que ambos acuerdos sostienen cláusulas similares y que en materia de controversias remiten al “*acuerdo entre las partes... y si no puede resolverse... la controversia será sometida, a petición de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral...*” en cuya conformación, si las Partes no designan los árbitros, puede intervenir el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya¹⁴. Cuando el conflicto es entre un Estado y los inversores, los acuerdos remiten al “*Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados*”, más conocido como CIADI, el tribunal auspiciado por el Banco Mundial desde el 18/03/65, “*o a un tribunal arbitral ‘ad hoc’ establecido de conformidad con las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).*”¹⁵ Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 15/12/76.

El impacto ambiental y el doble discurso

La planta de pasta de celulosa de la finlandesa Botnia es la más grande en su tipo en América y tendrá consecuencias por efecto de la contaminación sobre el río, el medio ambiente en general y

⁸ Art. 2, ac. 5.

⁹ Art. 3, ac. 1

¹⁰ Art. 5, ac. 1

¹¹ Art. 5, ac. 2

¹² Art. 6, ac. 1

¹³ Art. 7, ac. 1

¹⁴ Acuerdo entre Uruguay y España de 1992. Art. X, ac. 1

¹⁵ Art. XI, ac. 4

especialmente sobre las poblaciones a ambos márgenes del Río Uruguay. Los daños previstos serán irreparables. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel ha señalado que “La tecnología a usarse en la empresa Botnia es la ECF con dióxido de cloro, es la más contaminante y si se piensa en la escala de producción prevista, los daños serán irreparables.” En su intento por involucrar al gobierno uruguayo en la solución del conflicto y ante la demanda de los pueblos movilizados en la Argentina, Pérez Esquivel sostuvo que “Es necesario tener en cuenta que el problema de las celulosas no afectará únicamente a la Argentina, los mismos daños lo soportará Uruguay.” Afirmó también que “Esta situación se ha transformado en un problema de soberanía e identidad al tensar las relaciones y ánimos entre los dos países. No se tiene en cuenta que a las empresas internacionales no les interesan nuestros pueblos, privilegian el capital financiero sobre el capital humano. Lo vienen haciendo en otros países y continentes, de la misma manera.”¹⁶

Lo que pretendemos señalar son las responsabilidades de los dos gobiernos, cada quién en lo que corresponda. Ni el gobierno de la Argentina está exento de promover la contaminación ambiental, ni el gobierno uruguayo está obligado a convalidar los lazos contractuales establecidos por gobiernos anteriores. Si alguna duda existiera al respecto, bastaría con indicar el accionar soberano del gobierno boliviano con la nacionalización de los hidrocarburos, modificando así contratos previamente establecidos. Como sostienen dos autores, uno uruguayo y el otro argentino en un artículo compartido “Las particularidades y peripecias del conflicto por las plantas de celulosa no deberían ocultar que está en juego un dilema: la profundización de la disputa por atraer inversiones externas compitiendo en un “sálvese quien pueda” que puede llevar insospechados enfrentamientos regionales, o la apuesta a un proyecto regional soberano con complementariedad productiva sustentable y el reconocimiento y la compensación de las asimetrías”¹⁷. Señalan más adelante los autores “El conflicto actual entre Argentina y Uruguay no refleja los cambios sino las continuidades del “sálvese quien pueda” de toda una época. Como muestra de debilidad es posible observar el profundo contrasentido de que, en el momento que se cuenta con gobiernos supuestamente más progresistas y que reclaman, más que nunca, la necesidad que los latinoamericano asumamos nuestras responsabilidades y rol histórico en forma madura, el Banco Mundial - el cuestionado organismo señalado tantas veces como causante de “semillas de destrucción” se convierta en el árbitro esperado para laudarse en el conflicto. O la Corte de la Haya, cuya ineficacia en resolver conflictos internacionales es bien reconocida, se convierta en ámbito de dilucidación de la disputa entre Uruguay y Argentina en torno a la instalación de las plantas de celulosa. O peor aún, se busque que la salida salvadora sea terminar con los acuerdos regionales o avanzar en entendimientos individuales de preferencia comercial con países mayores (¿y las quejas de subordinación y falta de independencia?), en lo que sin duda sería un salto al vacío con impredecibles costos para nuestras sociedades.”

Qué soluciones para el conflicto?

Argentina llevó el tema a la Corte de La Haya y obtuvo una respuesta negativa en la expectativa de suspender la construcción de las plantas de fabricación de pasta de celulosa; aunque no afecta derechos futuros de la Argentina por los daños ambientales que puedan producirse. Uruguay ha sostenido que el ámbito de solución de controversias es el MERCOSUR, que se debate entre la inacción derivada de su tradición de estatuto “neoliberal” por su surgimiento en pleno auge de la ofensiva capitalista en 1991 y la expectativa por el reciente ingreso pleno de Venezuela y su formulación por un “socialismo del siglo XXI”. Hasta ahora, ni La Haya, ni el MERCOSUR han sido útiles para resolver el conflicto. El

¹⁶ <http://www.alterinfos.org>

¹⁷ Antonio Elías, uruguayo, docente de la Universidad de la República, miembro de la REDIU y Jorge Marchini, argentino, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro de EDI. Ambos son miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.

movimiento popular de Gualeguaychú, tras la pausa de la acción judicial, retoma la dinámica de resistencia, a la que se suma en forma creciente parte del movimiento popular de Uruguay. El problema del movimiento popular en ambos países y en rigor, en todo el planeta, es la construcción de alternativa política. La dinámica popular en la región ha volteado gobiernos, e incluso a llevado al gobierno a movimientos y partidos de izquierda y sin embargo no alcanzó para avanzar en las transformaciones sociales, económicas y políticas necesarias para resolver las demandas populares por una vida digna. El tema a discutir en los pueblos es sobre el rumbo de América Latina y el Caribe. El capitalismo no aporta soluciones, más que la reivindicación de ganancia, riqueza y poder en las condiciones actuales de transnacionalización. El desafío actual pasa por construir otro orden de relaciones sociales al interior de cada país y en el orden global. El “otro mundo posible” es el socialismo.

Alguien puede objetarnos y señalarnos que falta anunciar que media entre el conflicto actual, nuestra realidad, y el socialismo. Nos animamos a responder que el socialismo es una construcción a resolver en el presente, en la construcción de poder popular a partir de un imaginario social que sueñe con otros usos de las potencialidades actuales. Se puede pensar en los 25.000 millones de dólares que Brasil y Argentina asignaron al FMI como cancelación anticipada de deudas con el organismo. ¿Tienen usos alternativos y que contemplen la solución del conflicto en el Río Uruguay? ¿Sólo pasta de papel puede producirse a partir de la madera proveniente de eucaliptos en Fray Bentos, Uruguay, o pinos en Misiones, Argentina? ¿Puede pensarse en emprendimientos de la industria de la construcción en base a la madera y que involucre una solución integral de la vivienda popular en toda la zona? Son ideas para resolver el tema del desempleo y vincularlo a la solución de la vivienda y el medio ambiente, con la utilización de recursos públicos que hoy se derivan a la cancelación de deuda pública. Estas ideas solo son posibles si se cambia la lógica mercantil de organización de las relaciones económicas vigentes en la cultura política hegemónica en nuestros países. Ello supone una cultura alternativa por otro orden social y eso o puede pedirse a gobiernos que no reciban la presión de un poder popular que luche concientemente por otras relaciones sociales. Esa lucha por el socialismo, en proceso de reinstalación en la agenda política de la región, es el camino de la superación de la conflictividad entre países, y le da proyección alternativa a la solución de las reivindicaciones populares.

III Sujetos y ámbitos de la integración alternativa

El tratado de Asunción en 1991 dio la nota de la integración neoliberal en la región. En efecto, el MERCOSUR pasó a ser el modelo integrador a tono con el Consenso de Washington y por ello todos los protocolos integradores se adecuaron al espíritu del bloque regional. La integración instrumentada en los años 60' a 80', propia de otra etapa del desarrollo capitalista en la región, daba lugar al nuevo proyecto de corte liberalizador a favor del comercio y las inversiones. Los principales beneficiarios y sostenedores de este mecanismo son las CTN y los grupos económicos más concentrados de cada uno de los países, especialmente de Brasil y Argentina.

El MERCOSUR pasó a ser el ámbito de la negociación con EEUU por el ALCA y el TLC y también con la Unión Europea para los mismos fines. Las contradicciones al interior del MERCOSUR y de este con los bloques hegemónicos limitó las posibilidades de avanzar e institucionalizar acuerdos interregionales. La crisis del modelo de acumulación que definieron las políticas neoliberales, puesta de manifiesto con la devaluación brasileña en 1998 y argentina en 2002 explican el deterioro de la experiencia de integración, más allá de cualquier consideración en materia de beneficiarios y perjudicados por el intercambio comercial y los negocios estimulados.

Los sujetos de la integración regional son el capital más concentrado y los respectivos estados, favoreciendo los intereses y necesidades de los capitales actuantes en sus territorios. Por tratarse de

capitales transnacionales, también operan sus intereses más generales y globales por la liberalización, los que se juegan en el ALCA, en las negociaciones con la Unión Europea y en la OMC.

Lo nuevo en la región sostenemos son los pueblos y su iniciativa política expresada en algunos gobiernos en la región. Al principio fue la obstaculización de las negociaciones oficiales, por caso Venezuela en la III Cumbre de Presidentes de las Américas en Québec, Canadá, 2001. Pero desde fines del 2004 se suscribe el acuerdo ALBA entre Cuba y Venezuela, a quienes se suma Bolivia en 2006. Aparece en este proceso un nuevo sujeto por la integración, y otro ámbito hacia donde llevar el esfuerzo de integración económica, incluso más allá, en el ámbito social y cultural.

Entiendo como nuevos sujetos de la integración a la voluntad expresada en consignas como “otro mundo es posible”, “otra integración es posible”, “otra América es posible”, ya que expresan la carácter y objetivo de un conjunto de movimientos sociales y políticos que manifiestan colectivamente la aspiración no solo de resistir al proyecto imperialista y de las clases dominantes, sino la perspectiva de un imaginario alternativo.

No resulta menor concebir un ideario y una práctica superadora y transformadora a partir del diagnóstico crítico sobre el efecto desastroso que sobre los sectores populares han generado las políticas hegemónicas. Bajo las consignas mencionadas se han instrumentado campañas de movilización que involucraron a millones de personas y contribuyeron a limitar propuestas estratégicas como el ALCA. La consulta popular sobre el ALCA en Brasil movilizó a fines del 2002 a unos 11 millones de personas, los que se pronunciaron mayoritariamente por el rechazo a la iniciativa. En Argentina, sobre fines del 2003, la consulta fue protagonizada por más de dos millones de personas, coincidiendo con la negativa de la integración “anexión” sustentada por las clases dominantes en el continente. En ese camino se han constituido organizaciones e iniciativas que pueblan el fenómeno aludido de constitución de los pueblos movilizadas en actores políticos que buscan instalar un nuevo tiempo y una nueva sociedad.

Aludo a la gestación de un ámbito para radicar la integración económica y más allá, por la importancia que supone la existencia de voluntad política de tres Estados Nacionales para impulsar acciones concretas de producción, intercambio, solidaridad y financiamiento de iniciativas que los involucran. Pero también más allá, porque no solo de relaciones económicas se trata el ALBA. La dimensión cultural y humana, de respeto a las tradiciones de los pueblos originarios, constituyen un marco de referencia para recuperar una identidad de la región para construir complejamente la nueva sociedad, o si se quiere, el socialismo concreto de este Siglo XXI.

El ALBA aparece como acuerdo entre Estados nacionales y contempla la posibilidad de integraciones de Estados locales (provincias y municipios). A ello puede adicionarse la integración de movimientos populares y sus emprendimientos económicos, generando un desafío para instalar una institucionalidad especial en la gestión de la integración económica. El ámbito se restringe por ahora a la región ALC, más por los integrantes del acuerdo actual que por definición. Si bien el nombre del emprendimiento integrador remite al continente americano, no aparecen límites de una proyección global.

a) Desde el punto de vista de los **sujetos** existe un componente **estatal** importante y ello habilita a pensar en la necesidad de establecer un marco común de desarrollo económico social de esas dimensiones institucionales:

1. Existe ya un camino recorrido en los acuerdos suscriptos por el ALBA y los TCP, los que podrán profundizarse y ampliarse en la cooperación tripartita y con otros estados y/o

- movimientos sociales y políticos de otros países . Consolidar los acuerdos existentes, profundizarlos y extenderlos asociando a otros estados nacionales y subnacionales de la región.
2. La discusión a promover pasa por una convergencia de objetivos para modificar el sistema de relaciones sociales de producción. El objetivo socialista sustentado por Cuba y enunciado como “socialismo del siglo XXI” por Hugo Chávez, como propósito de la revolución bolivariana, aparece como una búsqueda de sociedad a construir. Sin ser la definición asumida por el gobierno de Bolivia, es necesario definir un conjunto de objetivos comunes de aquellos que protagonizan la experiencia de integración alternativa. En rigor, más allá de la denominación, el objetivo a construir con la integración alternativa, y en este caso con el ALBA, tiene que pasar por un conjunto de iniciativas políticas tendientes a modificar las relaciones sociales vigentes. El anticapitalismo y el socialismo aparecen como sustento originario de un rumbo a materializar con independencia de su denominación específica. Transformar las relaciones capitalistas, de explotación, por relaciones de cooperación para la satisfacción de necesidades populares debe constituirse en objetivo compartido.
 3. Privilegiar la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas en materia de alimentación, salud, educación, empleo y distribución equitativa de la riqueza y el ingreso. Sacar a la población de la pobreza y la indigencia y organizar un sistema económico solidario, autogestionario y para satisfacer las necesidades esenciales y de promoción del desarrollo integrado constituye una base esencial de la integración alternativa. Desde las iniciativas que expresan la “Operación Milagro” a los desarrollos de emprendimientos cooperativos desplegados en casi todos los países de la región, es que puede sustentarse un proyecto de esta naturaleza. La integración sustentada desde la liberalización de la economía promueve el incremento del intercambio comercial y la promoción de las inversiones privadas y su seguridad para favorecer la rentabilidad del capital. Se trata de modificar los objetivos y con ellos los instrumentos para su cumplimiento.
 4. Para lo dicho se requiere definir instrumentos comunes para asegurar convergencias de políticas regionales, en materia de logros para erradicar el analfabetismo, la desnutrición y las enfermedades de la pobreza. A modo de ejemplo, para avanzar en la integración europea se establecieron pautas de convergencia macroeconómica, tales como las de Maastricht. Se trata de tomar ese ejemplo y partir de un conjunto de objetivos sociales que apunten a satisfacer en primera instancia derechos sociales básicos, de alimentación, salud y educación. Los integrantes del proceso de integración alternativa deben continuar el trabajo educativo logrado por Cuba y Venezuela para eliminar el analfabetismo y encarar procesos de satisfacción de los derechos de salud y calidad de vida del conjunto social. Ello supone la búsqueda de ingresos públicos suficientes para atender la asignación adecuada del gasto público nacional para ese fin, reconociendo que se parte de situaciones diferentes en cada uno de los Estados involucrados en el ALBA. Lo que importa es la convergencia de fines y el establecimiento de metas que puedan ser evaluadas en la perspectiva común. La lucha contra la pobreza y la desigualdad, categoría esta última relativa a cada sociedad, deben ser parte de una estrategia común. Se trata de converger en un rumbo de sociedad a construir y en objetivos y metas evaluables para asegurar la transformación de la sociedad.
 5. Asumir la perspectiva de un proyecto productivo compartido y que articule la potencia alimentaria, energética e industrial que a modo de ejemplo presentan países como Argentina, Venezuela y Brasil. Los ejemplos trascienden a los integrantes actuales del ALBA y proyecta a su vez la perspectiva que ofrece la ampliación de este proceso de integración. Un serio problema en la región y en el Sur del mundo es el punto de partida para la acumulación económica. El capitalismo en cada uno de los países en que se abrió camino se sustentó en la explotación y la condena a vivir en la miseria a millones de personas. Una nueva organización social sustentada en la cooperación requiere de la instrumentación de una base económica

suficiente para la acumulación, e incluso para la confrontación con las fuerzas económicas y políticas que establecen obstáculos para ese propósito. Se trata de articular algunos emprendimientos productivos compartidos y financiados regionalmente. Ello demanda la recuperación social del excedente generado en el espacio que asume la integración del ALBA. Hemos dicho ya que en el ALBA no están Brasil ó Argentina, entre otros países en la región, pero es necesario involucrar actores estatales nacionales, provinciales y municipales más allá del acuerdo suscrito por Cuba, Venezuela y Bolivia. Es un desafío para la izquierda que gobierna Estados provinciales o municipales, generar condiciones para articular en el ALBA proyectos productivos o de intercambio, e incluso, más allá de lo económico en sentido estricto. Se trata de establecer mecanismos conjuntos de producción, que permita transitar un camino de establecimiento de relaciones de producción que vayan más allá de los límites territoriales de cada país y constituyan un testimonio de la potencialidad de la articulación popular y regional.

6. Constituir con fondos propios de los países una entidad de financiamiento para el desarrollo en la región, asociando promoción del empleo y desarrollo local, urbano y rural. El problema del financiamiento es clave para cualquier estrategia de desarrollo. En la coyuntura existen importantes reservas internacionales en los distintos países en la región. La utilización en común, de esos recursos totales o parciales es una cuestión política, más que económica. En la profundización de ese camino puede pensarse en instituciones regionales, entre las cuales puede resaltar una moneda común. Una posibilidad es que dicha entidad de financiamiento pueda articular una operatoria no restringida al ALBA, aunque coherente con una concepción de cooperación y relaciones de mutuo beneficio y que a modo de ejemplo pueda promover el financiamiento con mayor alcance territorial que el que definen los países suscriptores del acuerdo ALBA.

b) Pero también debe pensarse en el **sujeto popular**, más allá de la integración de los Estados. En ese sentido vale el ejemplo de los acuerdos entre el MST de Brasil y el gobierno de Venezuela para el financiamiento de emprendimientos productivos (alimentos) y su comercialización en la región, tanto como el aliento a una escuela de formación de profesionales en agronomía respetando las necesidades de formación requerida por el MST.

Se han realizado en los FSM realizados en Porto Alegre desde 2001 y en Caracas este año 2006 algunos encuentros e intercambios con potencia de funcionar en red de algunas entidades cooperativas o emprendimientos populares que podrían articular sus actividades si existiera una oficina centralizada de promoción de emprendimientos y de cooperación internacional regional. Consolidar estas redes es un desafío para los propios movimientos populares y los estados involucrados en el ALBA.

Existen antecedentes de encuentros regionales de “empresas recuperadas por sus trabajadores y autogestionadas”, realizados en Caracas en el 2005 y 2006, que en tanto articulen sus experiencias, productos y servicios, pueden materializar la máxima: “el pueblo aprende del pueblo”. La iniciativa popular constituye una institución motivadora a la hora de pensar creativamente en el desarrollo de proyectos alternativos. Que los pueblos enseñen y aprendan al mismo tiempo constituye parte del legado de Paulo Freire y su concepción de educación popular, en tanto superadora de una estrategia que remite al trabajo externo y profesional de la “consultoría”. Las respuestas creativas de los trabajadores y otros sectores populares para satisfacer necesidades inmediatas y reproducir la vida cotidiana pueden ser fuente inspiradora para organizar el orden social alternativo anteriormente sugerido. Es necesario hacer una síntesis teórica y organizativa de múltiples experiencias exitosas que no se difunden por límites económicos, culturales o sociales. Pueden contribuir a resolver problemas de la vida y organización económica cotidiana desde la práctica de algunos grupos sociales.

El intercambio cultural, la promoción de investigaciones conjuntas (caso de Bolivia con sus aportes al rescate de la cultura de los pueblos originarios), la edición de Revistas, Libros y Publicaciones diversas es un espacio que puede asociar a Universidades y Centros Culturales, Editoriales y emprendimientos teatrales, con movimientos populares en la región. Se trata de alentar una mayor integración cultural al estilo de las Ferias del Libro (temáticas por países) que promueve Cuba, alentando la apertura de “Casas Culturales del ALBA” que puedan asentarse en organizaciones existentes. Se trata de instalar en la conciencia social que el ALBA se construye desde la propia iniciativa popular.

En definitiva, en las dos dimensiones presentadas, tanto a nivel de los estados, como la articulación con movimientos sociales, se trata de avanzar en la institucionalización del ALBA. Por ahora, la voluntad política de los tres gobiernos da fuerte impulso a las primeras iniciativas. La profundización del ALBA y su extensión requiere de un proceso de institucionalización que establezca la política integral de articulación de procesos que involucren a estados y movimientos. Ello requiere de reglas claras que definan la cuota y forma de participación de actores disímiles, tales como los estados y los movimientos.

A doscientos años de las primeras gestas por la independencia de ALC se reabre la perspectiva para pensar en un destino común, independiente, de Nuestra América. La integración alternativa en curso puede habilitar nuevamente la perspectiva por el socialismo. La tesis está planteada en términos de posibilidad y asociada a la capacidad de instalar un “proyecto” en el imaginario social. Se trata de una formulación que recoge, en nuevas condiciones, las proposiciones de grandes pensadores en distintos momentos de la gesta por la emancipación de América Latina y el Caribe. La nueva dinámica social y política de los pueblos en la región es una convocatoria a los intelectuales para contribuir a nuevas síntesis teóricas que empujen una realidad más allá de un cambio de discurso en el gobierno o en el poder y sea parte activa de la transformación social.

Las tendencias de política económica en América Latina y el Caribe (ALC). Una crítica al neoliberalismo, a su continuidad por otros medios y los intentos por superarlo.

Por: Julio C. Gambina*

RESUMEN:

El documento analiza tres aspectos. El primero se considera en la introducción y se vincula a los datos macroeconómicos de América Latina y el Caribe, que expresan una tendencia al crecimiento, más allá de las especificidades de las políticas económicas locales. Se pretende mostrar que el crecimiento de la región está asociado a un ciclo de expansión del capitalismo en escala global. Se pone el acento en el importante crecimiento de Argentina y Venezuela que arrastran hacia arriba el promedio de la región. El tema no es menor, ya que en el segundo capítulo y en extenso se analizan los nuevos rumbos de la integración regional, y el caso argentino y venezolano son analizados desde diferentes enfoques. En especial, por la definición en la “reconstrucción del capitalismo nacional” sostenida por el gobierno argentino desde el 2003 y la formulación que desde fines del 2004 sostiene el presidente de Venezuela por un “Socialismo del Siglo XXI”. El capítulo analiza las diferentes variantes que se asocian en los proyectos integradores en curso en la región, para detenerse especialmente en el impacto de la incorporación de Venezuela en el MERCOSUR desde mediados del 2006, lo que permite discutir sobre la democracia y el rumbo capitalista y socialista en la región. También se analiza el conflicto entre Argentina y Uruguay, el que se asocia a la suscripción de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y que privilegian el problema de la seguridad jurídica de las inversiones antes que las necesidades de la población, especialmente aquella de menores recursos. El tercer capítulo remite a la consideración sobre los sujetos y ámbitos de la integración alternativa, donde se destaca la experiencia y los desafíos en la construcción del ALBA.

Buenos Aires, noviembre de 2006.

* Profesor en la Universidad Nacional de Rosario y la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (entidad miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO). Integrante del Comité Directivo de CLACSO (2006-2009). Director Adjunto del Centro Cultural de la Cooperación.